

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, por la que se reclasifica el puesto de Secretaría de la Mancomunidad Integral de municipios "Sierra de Montánchez", eximiéndole de la obligación de mantenerlo reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional. (2016061915)

La Mancomunidad Integral de municipios "Sierra de Montánchez", con sede en el municipio de Torre de Santa María (Cáceres), acordó solicitar a la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local de la Junta de Extremadura, la reclasificación del puesto de Secretaría, eximiéndole de la obligación de mantenerlo como puesto propio reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. La Mancomunidad Integral de municipios de "Sierra de Montánchez" solicita, con fecha 12 de mayo de 2016, la reclasificación del puesto de Secretaría, mediante exención de la obligación de mantenerlo como puesto propio reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional y autorizar el desempeño de las funciones reservadas por funcionario con habilitación nacional mediante acumulación de funciones. Dicha solicitud se acompaña de la siguiente documentación:

- Certificación del acuerdo adoptado por su Asamblea General, en sesión plenaria celebrada con fecha 18 de abril de 2016, sobre solicitud de exención de la obligación de mantener el puesto de Secretaría como puesto propio reservado a funcionarios de habilitación nacional, y para garantizar la continuidad en el desempeño de las funciones propias e inherentes al mismo, mediante nombramiento en acumulación de funciones a favor de funcionario de la Escala de habilitación nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.º, en relación con el artículo 31.2.º, ambos del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Escala de Habilitación nacional, y atendiendo a la redacción dada por los Estatutos de la Mancomunidad, la acumulación será desempeñada por funcionario habilitado nacional de alguno de los municipios que la integran.
- Informe de la Presidencia de la Mancomunidad, justificativo de las circunstancias concurrentes para solicitar la exención del puesto de Secretaría, entre ellas, la imposibilidad de constituir Agrupación de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, conforme determina el artículo 4.2.º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio; así como las circunstancias que concurren para solicitar la exención del mantenimiento del puesto.
- Certificación acreditativa del importe de los presupuestos de la Mancomunidad correspondiente a los últimos ejercicios, así como de los servicios que se prestan en la entidad.



- Anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de abril de 2016 y certificación acreditativa de someterse el acuerdo a información pública, a efectos de publicidad y posibles alegaciones, y no haber habido reclamaciones al expediente.

Segundo. Solicitada subsanación de la solicitud, la Mancomunidad aporta acuerdo de la negociación sindical relativa a la modificación del puesto mediante exención de la obligación de mantener el puesto, concretando el desempeño de las funciones reservadas por funcionario de la Escala de Habilitación nacional mediante nombramiento en acumulación de funciones, así como certificaciones de la Secretaría de la Mancomunidad acreditativas de la reducción del volumen de servicios que presta la entidad, tras la adaptación de los Estatutos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, población, plantilla de personal y financiación de los servicios que presta; todo ello en orden a la justificación suficiente de las circunstancias que concurren para alcanzar la petición de exención formulada.

Se adjunta al expediente copia de los Estatutos de la Mancomunidad, determinando que el ejercicio de las funciones públicas necesarias que debe haber por prescripción legal en las entidades locales, concretando que las mismas serán desempeñadas por funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios que componen la entidad.

Tercero. El Servicio de Administración Local ha informado la procedencia de eximir a la mancomunidad de la obligación de mantener el puesto de Secretaría como puesto propio reservado a funcionarios de habilitación nacional, así como el desempeño de las funciones reservadas mediante nombramiento en acumulación de funciones por alguno de los funcionarios de habilitación nacional miembros de la entidad.

Cuarto. La Diputación provincial de Cáceres ha emitido informe, así como el Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, formulando objeciones a la exención solicitada; no obstante, la entidad ha justificado suficientemente las circunstancias que concurren para obtener la exención del mantenimiento del puesto de Secretaría, por concurrir las circunstancias señaladas en el artículo 4.º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, como es la reducción del volumen de servicios, tras la modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la insuficiencia de recursos propios para el mantenimiento del puesto, quedando las funciones reservadas garantizadas mediante el desempeño en acumulación de funciones por alguno de los funcionarios de habilitación nacional de uno de los municipios integrantes de la Mancomunidad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (BOE núm. 312, de 30-12-2013), contempla en sus artículos 92 y 92.bis el régimen jurídico para el personal funcionario perteneciente a la designada como Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, correspondiendo al Gobierno estatal regular mediante Real Decreto las especialidades y régimen jurídico en general aplicable a los funcionarios perteneciente a dicha escala.



El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, califica como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación.

Segundo. La disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, mantiene vigente la normativa reglamentaria referida a los funcionarios de habilitación nacional en tanto no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en todo aquello que no se oponga a los dispuesto en dicha ley y, asimismo, los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación.

En materia de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional, será de aplicación el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, que regula tanto la provisión de esta clase de puestos de trabajo como la creación, clasificación, exención y/o supresión de los mismos, los cuales, incluidos por las Corporaciones Locales en sus relaciones de puestos de trabajo como puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional, deberán garantizar el desempeño de las funciones públicas a que hace referencia el citado artículo 92.bis.

Dicho reglamento señala en su artículo 6 que los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional en comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, comunidades de villa y tierra u otras entidades similares, se clasificarán a instancia de éstas por el órgano autonómico competente, debiendo realizarse la misma en los términos que establece su artículo segundo.

La aprobación de los expedientes de creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional es competencia de las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial y conforme a las normas establecidas en el citado precepto, y lo dispuesto en los artículos 2.º, 4.º y 9.º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, anteriormente citado, conforme a la vigencia que le otorga la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

El artículo 31.2.º de dicho reglamento determina que por el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de las funciones de Secretaría-Intervención de los municipios o entidades eximidas de la obligación de mantener dicho puesto.

Por su parte, el artículo 42.2 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, contempla, igualmente, la posibilidad de eximir a las mancomunidades de la obligación de mantener el puesto de Secretaría cuando su volumen de recursos o servicios no sea suficiente para el mantenimiento de dichos puestos.

La resolución de los expedientes de clasificación deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, según dispone el artículo 9 del citado reglamento, y remitirse al Ministerio



competente en la materia para su publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con carácter trimestral. Asimismo, corresponde inscribir y anotar en el Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que existe en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas integrado con las Comunidades Autónomas, todos los actos que afecten a estos funcionarios.

Tercero. El artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, señala los motivos que han de tenerse en cuenta para que las Mancomunidades de municipios pueden ser eximidas de la obligación de mantener puestos propios reservados a habilitados de carácter nacional, esto es, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos, previo informe de la Diputación Provincial correspondiente. En caso de exención, las funciones reservadas a habilitados nacionales en las Mancomunidades de Municipios se ejercerán a través de funcionarios con habilitación nacional de alguno de los municipios que las integran, mediante nombramiento en acumulación de funciones, o en los términos de lo dispuesto en el artículo 31.2.º del Real Decreto 1732/1994, por cualquier otro funcionario de habilitación nacional o bien mediante los servicios de asistencia prestados por la respectiva Diputación Provincial. Asimismo, y para garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de exención se deberá concretar el sistema elegido; en el presente caso, se ha optado por el desempeño de las funciones reservadas por funcionario con habilitación de carácter nacional mediante nombramiento en acumulación de funciones de alguno de los municipios que la integran.

Y la previsión estatutaria en la Mancomunidad contempla el desempeño de las funciones públicas necesarias que debe haber por prescripción legal en las entidades locales, circunscribiéndolas a que las mismas sean desempeñadas por funcionario de la Escala de habilitación nacional de alguno de los municipios miembros, mediante acumulación de funciones conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2.º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Se ha acreditado por la entidad la insuficiencia de recursos presupuestarios ordinarios para atender dicho gasto, así como la reducción del volumen de servicios que vienen prestando, y que queda igualmente garantizado el desempeño de las funciones reservadas por habilitado nacional mediante nombramiento en acumulación de funciones. Al concurrir el requisito presupuestario y la reducción del volumen de servicios, procede autorizar la exención de la obligación de mantener el puesto reservado a funcionarios de habilitación nacional, habiendo sido propuesta por la Mancomunidad en los términos del artículo 4 en relación con el artículo 6 del citado reglamento.

En uso de las atribuciones que le confiere a la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local el Decreto 263/2015, de 7 de agosto (DOE extraordinario n.º 5, de 8 de agosto) por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura,

RESUELVE:

Primero. Reclassificar el puesto de Secretaría de la Mancomunidad Integral de municipios "Sierra de Montánchez", con sede en Torre de Santa María (Cáceres), eximiéndole de la obligación de mantener el mismo como puesto propio reservado a funcionario de habilitación



nacional. Las funciones reservadas se ejercerán por funcionario de la Escala de Habilitación Nacional de alguno de los municipios miembros que la integran, en los artículos 4.2 y 31.2.º del Real Decreto 1732/1994, así como lo previsto en los Estatutos de la Mancomunidad.

Segundo. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y dar traslado de dicho acuerdo a la entidad local interesada y al Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán interponerse, en los términos que se indican, los recursos siguientes:

- Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente Resolución, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.
- Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 24 de noviembre de 2016.

La Secretaria General de Política Territorial
y Administración Local,
NIEVES ESTEBAN PAZ